

Europa empieza a cuestionar el urbanismo valenciano

MÁS de 15.000 quejas de ciudadanos residentes en la Comunidad Valenciana, en su mayoría extranjeros que han buscado aquí el modelo Florida para el tramo final de sus vidas, se agolpan ante la llamada Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Casi todos son pequeños propietarios que han tenido que ceder sus terrenos y casas frente al avance de las nuevas urbanizaciones ante las que apenas se pueden oponer porque una ley aprobada por los socialistas valencianos, la LRAU, pero sin desarrollo normativo por parte del PP para fijar unas condiciones más equilibradas, favorece a los agentes urbanizadores y ningunea a los propietarios del suelo. Los ayuntamientos, como es bien sabido, y con absoluta independencia de su color político, también se han sumado a la fiebre urbanizadora, entre otras cosas porque es la única gran fuente de ingresos para sus ruinosas y a veces ambiciosas haciendas. El resultado es ese profundo malestar entre unos ciudadanos europeos que vinieron aquí en busca de un supuesto paraíso que ha terminado convertido en un mar de chaletitos adosados y apartamentos.

No es un problema menor, pues los enviados de la mencionada Comisión de Peticiones están de gira por la Comunidad para inspeccionar las demandas y ya han lanzado una primera amenaza al Gobierno español por amparar la referida LRAU valenciana. A la amenaza ha contestado el conseller **Rafael Blasco** con un sinsentido: apelando al refrendo de su ejecutivo autonómico por los electores, como si las urnas fueran argumento suficiente en lo político y admisible en lo moral para sobrepasar los principios de justicia derivados del Estado de derecho que rige la convivencia en cualquier país democrático serio. El problema de estos abusos, sin duda, habrá que abordarlo, y pronto, de otras maneras.